

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. *S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Inan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta* oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por los CC. Serapio Santiago y Luis Rodríguez, contra una resolución de la Jefatura de Hacienda del Estado, en la que se declaran como bienes pertenecientes á la Nación y se adjudican al denunciante de ellos, C. Pánfilo Ortega, tres solares que los exponentes dicen ser de su propiedad.*

ESCRITO DE LOS QUEJOSOS.

C. Juez de Distrito.

Serapio Santiago y Luis Rodríguez, ante vd. en la mejor forma y como mas haya lugar en derecho, respetuosamente exponemos: que en mérito de todo lo actuado y de la mas rigurosa y estricta justicia, se dignará vd. impartirnos el amparo nacional que nos concede la ley de la materia en los tres sitios que poseemos en el barrio de San Antonio de esta Ciudad.

La simple y sencilla lectura de las pruebas aducidas, demuestran de una manera

evidente la justicia que nos asiste; sin embargo, para hacerla mas palpable, pasamos á hacer un ligero análisis de su contenido.

La vista de ojos que vd. mismo practicó y cuya diligencia corre á fojas 34, es una prueba plena en concepto de las leyes 8 y 13 título 14 partida 3ª, para contrariar el concepto de criazo emitido por el Gefe superior de Hacienda en lo que llama sentencia; pues como vd. mismo ha visto, se haya cercado artificialmente, poblado de árboles frutales y con huellas inequívocas de haber sido bañados con el sudor de nuestros antepasados.

El testimonio compacto y unánime de los CC. Eustaquio Chanona, Cándido Gomez, Domingo Balcázar y José M. Ruiz, ratificados á fojas 33 cara y vuelta, es una prueba mas que concluyente ante la ley 32 título 16 partida 3ª para quedar satisfecho, que ha mas de cuarenta años que trabajamos los sitios en cuestion, y que jamas ni nunca han pertenecido á cofradía alguna ó vinculacion eclesiástica.

Todavía son mas insinuantes en este respecto las deposiciones de Máximo Ramos, Ignacio Arismendiz, Vicente Velasco y Tomás Martinez, que de comun acuerdo niegan la existencia de toda cofradía en la iglesia de San Antonio, y explican de una manera que no deja lugar á la duda, el modo y forma con que anualmente se celebra la funcion del santo.

Si nos fijamos por un momento en las declaraciones de José Ruiz, Benigno Martinez y Vicente Velasco, que obran á fojas 27 y 28, 35 y 36 de los autos, bien pronto nos convenceremos, que si nosotros hemos poseído por mas de cuarenta años los sitios en cuestion, la posesion de nuestros antepasados se pierdo allá en la oscuridad de los tiempos, que bien pudiera arrancarse desde los de la conquista.

Sí señor Juez: los indios mejicanos y entre ellos los del barrio de san Marcos, dueños y señores absolutos de todo el continente americano y dentro de él los terre-

nos en que está erigido el barrio de San Antonio, sufrieron la pena de ser despojados por el conquistador, de sus terrenos, de sus jollas y demas bienes que tenían con el justo, natural é indisputable derecho de primitiva ocupacion.

El rey de España que poco mas ó menos estaba penetrado de semejante injusticia y de los rudos vejámenes y téquios de que eran víctimas nuestros antecesores, les restituyó con el título *regalías* parte de los terrenos que les usurpaba el conquistador, y entre ellos los terrenos en que están ubicados actualmente el barrio de San Antonio y los tres sitios que se presentan como objeto de la cuestion, como pormenorizadamente constaba en los títulos y real cédula que por una fatal desgracia se perdieron en el año de 1863, al acuartelarse las tropas del general Salinas en la iglesia de San Antonio, como consta de las declaraciones de José Ruiz y Benigno Martínez, que obran á fojas 35 y 36 de los autos.

Las deposiciones de los CC. Pedro Estrada y Benigno Martínez, solo sirven para acreditar el solemne perjurio en que han incurrido, para demostrar su inmoralidad, su saña y animosidad, nada menos que contra personas que como nosotros se hallan unidos con vínculos de amistad y de sangre. Vd. C. juez de Distrito, sabrá apreciar cuánto importaría el desprestigio é inmoralidad en la prueba testimonial, y por lo mismo entendemos que no desapercibirá la correccion de estas faltas.

Entre tanto, nosotros apoyados en pruebas como las que están rendidas, tan claras como la luz del dia; pedimos que el juzgado se digne declarar legal nuestra propiedad y legítimamente adquirida de tradicion en tradicion y de siglo en siglo, hasta nuestros dias, robustecida no solo con los derechos de primitiva ocupacion que incumbe á los individuos de nuestra raza; sino con los de prescripcion para la cual sobra el tiempo prefijado por la ley, buena fé, justo título y cosa prescriptible como pue-

de verse en las leyes 11, 12 y 14, título 29, partida 3ª; 2ª título 8º libro 11. Novísima Recopilacion; 4, 6, 7, 9 y 17 del título y partida citada, 4 y 9 del título y libro citado.

Con lo expuesto se convencerá vd. C. juez de Distrito, que el Gefe superior de Hacienda ha herido exabrupto, todas las garantías que nos concede la gran carta fundamental de la Nacion, principalmente la que dejo señalada en mi primer ocurso, y que el denunciante al recusar á vd. y al C. fiscal interino, no ha intentado mas que excomotear el negocio, para ver si en otra parte y en mejor hora para él, pero fatal para nosotros, reparaba sus esperanzas perdidas; pero sus pretensiones exageradas é injustas, tuvieron que estrellarse ante la ley y ante la recta y muy acreditada justificacion de vd.

Por tanto, refiriéndonos á todo lo que tenemos alegado y demostrado,

A vd. suplicamos se digne declarar, que molestados como hemos sido en nuestra legítima propiedad, la justicia de la Nacion nos ampara, con pago de costas, daños y perjuicios, que así es de justicia que pedimos y en forma protestamos.

San Cristóbal Las Casas, Junio diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.

A ruego de los interesados que no saben firmar lo hago yó.—*Francisco M. Vila.*

#### *Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El que suscribe, fiscal interino nombrado en el juicio de amparo que los CC. Serafio Santiago y Luis Rodriguez han intentado alegando en forma, con arreglo al art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869; impuesto del ocurso de los actores, del informe y justificaciones del C. Gefe superior de Hacienda y de las pruebas últimamente recibidas, dice: que de autos resulta, que los agraviados piden amparo de una sentencia, que aquel empleado dictó con in-

cha 22 de Abril último, adjudicando al denunciante, C. Pánfilo Ortega, tres sitios de la propiedad de aquellos, bajo el concepto de corresponder á bienes nacionalizados; porque, con su providencia que trató de llevarla al cabo, contraría el art. 27 de la Constitución general de la Nación.

Las partes agraviadas, fundan su accion en que el Gefe superior de Hacienda, decidiendo en un asunto contencioso, cuyo conocimiento en ningun caso y por ningun título le atribuyen las leyes, les ha quitado su propiedad para darla á otra persona que no necesita de ella, para que disfrute de sus trabajos, con infraccion de aquella garantía individual, consignada en el citado art. 27 del pacto fundamental de la Nación.

Agregando al mismo tiempo, que al atribuirse la jurisdiccion que no tiene, se ha desviado de las prescripciones de las leyes que marcan sus facultades, para fallar con pruebas reprobadas en el derecho.

Para formar juicio de la cuestion, el Fiscal ha visto con detenimiento los procedimientos del C. Gefe superior de Hacienda, marcados con las justificaciones que ha acompañado á su informe, y de ellas ha podido averiguar: que admitió por cierto la denuncia que hizo el C. Ortega, de tres sitios que poseen los agraviados en los suburbios de esta ciudad, porque ofreció probar que correspondian á la cofradía de San Antonio de la seccion que lleva el mismo nombre, á fin de que se le adjudicaran, pagando su importe á la Hacienda pública; y no obstante que en dicha admision se le previno designar el escribano ante quien se otorgó la escritura respectiva, el archivo ó protocolo donde se encuentre, ó exhibir las constancias que acreditaran su aserto con arreglo á la suprema circular de 9 de Agosto de 1869, solamente presentó una informacion de testigos, corrida ante el Juzgado de 1ª instancia del ramo civil de esta ciudad, sin citacion de la contraria, en la cual, dos testigos dijeron: que aquellos sitios no cor-

respondian á Santiago y Rodríguez, sino á la cofradía de San Antonio, poseyéndolos únicamente como mayordomos. El Gefe superior de hacienda, en vista de esta probanza, previno á los agraviados, que dentro de tercero dia usaran de su derecho y alegaran lo que les conviniera; y habiendo respondido por escrito, y de palabra, que los sitios no correspondian á cofradía alguna, sino á su esclusiva propiedad, y que por lo mismo no eran denunciabiles pidieron que se obligase al denunciante á presentar el testimonio de la escritura en que fundaban su accion; y que en caso de presentarla, se les diera vista de ella, ó de cualquier prueba que adujeran, declarándose sin lugar la pretension del denunciante, siempre que no cumplieran con aquel deber; ofreciendo al mismo tiempo probar, que los sitios denunciados, los poseen hace mas de cuarenta años; solicitud que desechó el C. Gefe superior de hacienda, en auto de fecha 18 de Marzo último, volviendo á intimar á los agraviados á que dentro de tercero dia presentasen sus pruebas, instrumentos, ó documentos que aseguraran su propiedad; añadiendo el denunciante en el acto de la notificacion, que no se les admitiera informacion sobre posesion, porque ésta no da propiedad. Trascurrió el término concedido, y el denunciante, insinuándolo verbalmente al C. Gefe superior de hacienda, pidió que se le adjudicaran los sitios denunciados; pero los agraviados presentaron otra informacion de cuatro testigos, corrida ante el mismo Juzgado de 1ª instancia, en la cual unánimes dijeron: que hace mas de cuarenta años que los CC. Scrapio Santiago y Luis Rodríguez, poseen tres sitios cada uno de ellos: que todos lo poseen en propiedad, y no porque sean nacionales ó de la Iglesia ó comunidad, con excepcion del C. Cándido Gomez que añadió: que esto lo sabe por simple vista y no porque tenga constancia de otro género. Estas pruebas fueron presentadas, por cierto en 28 de Marzo citado, de las cuales se dió vista al denuncia-

te, que las tachó de nulas, por seis razones.

Primera; Porque las declaraciones fueron recibidas ante Juez incompetente y sin la citación fiscal.

Segunda; Porque los testigos no son presenciales ni contestes, ni declaran que los sitios correspondan en propiedad á los que se llaman dueños.

Tercera; Porque los testigos son de oídas.

Cuarta; Porque la prueba testimonial no es título traslativo de dominio y no está recibida *ad hoc* como debiera.

Quinta; Por estar caídas las declaraciones en partes esenciales sin que al fin se haya salvado; y

Sesta; porque fueron presentados extemporáneamente. Bajo cuyos fundamentos, y tomando el C. Gefe superior de hacienda, en consideración las declaraciones exhibidas por el denunciante, falló en 22 de Abril último de conformidad con su petición, por no haber probado los dueños su propiedad, adjudicándole los mencionados con prevención de hacer el pago en los términos de la suprema circular de 10 de Diciembre de 1869, previo avalúo y liquidación correspondiente; resolución que se hubiera llevado á debido efecto, no obstante que los agraviados solicitaron el pase del negocio al Juzgado de vd. por ser contencioso, si no es que intentan el recurso de amparo,

Basta dar una ojeada á estos procedimientos que son conformes con los actos del C. Gefe superior de hacienda, para llegar al conocimiento de que traslimitó sus facultades: porque si hubo controversia y decisión de causa, ó sea la discusión de un negocio entre actor (cuyo papel representa el denunciante) y réo, y el C. Gefe superior de hacienda, dirigió y determinó con su decisión ó sentencia definitiva, es evidente que se ingirió en la jurisdicción contenciosa, atribuyéndose poder para administrar justicia, entre una y otra parte, para cono-

cer en materia civil, decidirla y sentenciarla. De donde nacen varias consecuencias:

Primera; que el C. Gefe superior de hacienda, invadiendo la facultad que solo compete á los Tribunales de la Nación, según el art. 97 parte 3ª de la Constitución general. Fuera de la facultad económico-coactiva, á los Gefes superiores de hacienda no les es lícito juzgar y sentenciar; mas esta facultad que les concedo la suprema ley de 20 de Enero de 1887 y sus correlativas, no se extiende mas allá de las deudas que son líquidas "como son los alcances que ya lo están, las de las alcabalas, contribuciones y otros ramos en que legalmente se hayan convenido términos ó señalado plazos para el pago;" porque entonces es indispensable, para hacer efectiva su recaudación y cobro de los créditos pendientes ó que en adelante se causaren, pero siempre bajo la restricción de no ingerirse en la jurisdicción contenciosa que corresponde exclusivamente á los jueces designados en aquella parte de la Constitución general de la Nación.

Sin justificar la denuncia con instrumentos pacíficos, sino con una información imperfecta, el negocio era dudoso, y la acción del C. Pánfilo Ortega merecía esclarecerse ante el Tribunal competente, en donde las partes usaran libremente de sus derechos. "Para evitar dudas dice el art. 2º de la citada ley, sobre los límites á que se sujeta la facultad económico-coactiva, se declara, que solo se entenderán por contenciosos aquellos puntos en que fundadamente se duda sobre la aplicación de la ley, al caso particular que se verse, ó en que sean forzosas las actuaciones judiciales, como en las que se dispute el pago ó deuda de una cantidad, que por su origen, por la cuota ó por la variación de tiempos y circunstancias, ofrezca motivos fundados de duda sobre la aplicación de la ley" ¿y qué otro motivo fundado de dudar puede haber que la prescripción de mas de cuarenta años que los agraviados ofrecieron como excep-

ción perentoria contra una pretensión vagamente concebida?

Es un derecho de todo mexicano el uso libre y seguro de la propiedad; derecho que constituye una garantía que la autoridad no puede violar, valiéndose de ardid ó fuerza, á no ser que medie juicio y sentencia de Juez competente, arreglada á las leyes. La propiedad, pues, es inviolable, no solo por el particular, sino tambien por los abusos del poder. En clase de garantías, consiste no solo en el dominio, ó en el derecho de disponer de una cosa al arbitrio, sino de la esperanza segura, y en la persuacion de sacar este ó aquel fruto de alguna cosa, segun la naturaleza del caso. De donde se origina la segunda consecuencia: que siendo forzosamente incompetente el C. jefe de Hacienda, para conocer y decidir en la controversia que se suscitó, no pudo molestar en sus posesiones á los agraviados Serapio Santiago y Luis Rodríguez, sin contravenir al art. 16 de la misma Constitucion general, cuando en el auto de 22 de Abril, no fundó ni motivó la causa legal, del procedimiento.

Es constante que la prueba de testigos recibida fuera del término probatorio, no trae aparejada ejecucion: y si es que en el juicio contencioso es un medio legal de probar los hechos, es tambien cierto que si se recibe por juez incompetente, sin conocimiento y formal citacion de la contraria, no forma prueba perfecta y completa, ni hace fé (L. 23 tit. 16 part. 3ª) No pudo, por consiguiente, servir de fundamento al auto de 22 de Abril, cuando, por otra parte, los agraviados presentaron en contraposicion igual prueba, de mayor número de testigos, contestes en afirmar los derechos que defienden.

Sin las justificaciones necesarias, las leyes de desamortizacion tampoco pueden dar virtud y eficacia para fundar y motivar el auto de 22 de Abril; porque siendo una emanacion de los principios constitucionales, han de estar en perfecta armonía

para cumplir sus preceptos, sin perturbar el pacto solemne adoptado en toda la nacion; cualidad que las debe distinguir para no privar á los CC. de la propiedad que les corresponda.» La propiedad de las personas, no puede ser ocupada sin su consentimiento;» por consiguiente, los Jefes superiores de Hacienda, circunscribiéndose á las facultades que aquellas leyes les conceden, así como los CC. en el libre uso de sus derechos, están en el caso de ejercitar las acciones y excepciones legitimamente establecidas, para cobrar las rentas ó deudas del Erario, sin que sirvan de pretesto para despojar injustamente, privar, ó perturbar á un C. en la propiedad que le corresponda.

Por todas aquellas leyes, están en consonancia con la Constitucion general, y todas, principalmente la suprema ley de 9 de Abril de 1862, no permiten que se admita denuncia alguna de capitales, sin que se acompañe la escritura pública, en que se ha de fundar; y á este tenór la suprema circular de 31 de Julio de 1868, deseosa de evitar molestias y gastos á personas cuyos bienes fueren denunciados, y de evitar á las oficinas del ramo infructuoso recargo de sus labores, con denuncias vagamente concebidas, que no producen el mas leve dato para proceder á la ocupacion y cobro de bienes y capitales; previene, que todo denunciante está en la obligacion de justificar su denuncia con cuantas instrucciones y datos conduzcan al esclarecimiento de la verdad, y que no se admitan las que carezcan de este requisito; no precisamente para apreciar á los deudores en virtud de la facultad coactiva, que solamente tiene lugar cuando la deuda por su naturaleza trae aparejada ejecucion, sino para que se averigüe en el juicio competente, ante los Tribunales de la nacion.

En igual sentido, el art. 1º de la suprema circular de 9 de Agosto de 1869 de que se vale el C. Jefe S. de Hacienda para sus procedimientos, previene que las denun-

cias que se presenten de capitales, deben expresar el importe del capital, la corporación á que reconocia, la finca, gravado, la fecha del reconocimiento, el escribano ante quien se otorgó la escritura, el archivo ó protocolo donde se encuentra vista; no precisamente para que aquel empleado juzgara y fallara como lo hizo, sin que el denunciante cumpliera con los requisitos referidos, sino para admitir la denuncia y darle el giro que conviniera; pues con presencia de la copia simple, que el C. Gefe S. de Hacienda debía pedir al escribano respectivo, el informe de este sobre si está vivo el registro que se hubiere hecho, y lo que el responsable expusiera en favor de sus derechos, debía proceder á su cobro, siempre que de los antecedentes apareciera que el capital denunciado está vivo. Sin embargo, respetando la ley las justas excepciones del que apareciere responsable, añade: que si espusiese que él ó sus causantes adquirieron la finca en calidad de libre, y hubiere trascurrido desde esa adquisición el tiempo necesario para que proceda la prescripción contra la acción hipotecaria, será inadmisile el denuncia de una imposición, hecha con anterioridad á esa adquisición, *pues en todo caso el fisco no puede ejercitar acciones ni tener derechos que las corporaciones eclesidásticas no podran ejercitar ni tener.* Haciendo aplicación de estas terminantes disposiciones de la ley, á los procedimientos del C. Gefe supremo de Hacienda, no puede encontrarse controversia mas clara y terminante; por que admitió la denuncia sin que el denunciante cumpliera con la prevención del art. 1º de la referida circular de 9 de Agosto, no obstante que los agraviados lo pidieron; por que la admitió, con solo la vaga oferta de probarla, previniendo á los mismos agraviados que usaran de su derecho, alegando lo que les convenia; por que la admitió y permitió en ella, con solo la debil y peligrosa prueba de dos testigos que declararon sin los requisitos legales, volviendo á intimar

á los agraviados que presentasen pruebas de su propiedad contra el sentido de aquella disposición, cuyas expresas intenciones han sido sostener aquel principio inconcuso de derecho "que al actor ó sea el denunciante, pertenece ó incumbe la prueba" y por que en fin, ordenó la ocupación de los sitios de los agraviados, á pesar de que á su tiempo alegaron la posesión de mas de cuarenta años, comprobando posteriormente con la declaración unánime de cuatro testigos. De donde se colige, que el C. Gefe S. de Hacienda falta á las leyes que marcan sus facultades, en el auto de fecha 22 de Abril, que lo funda con pruebas imperfectas; abuso que viola aquel principio constitucional del art. 27 de la carta fundamental de la Nación; por que desviándose de sus atribuciones, manda á ocupar la propiedad de los CC. Serapio Santiago y Luis Rodriguez; y lo que es mas, los priva de la libertad de probar sus derechos ante la autoridad competente, como lo ofrecieron.

Demostrada esta tercera y última consecuencia, que se desprende de los procedimientos del C. Gefe superior de Hacienda, las pruebas producidas en el juicio de amparo, no hacen mas que confirmar los graves resultados que acarrea á la sociedad el desprecio de los principios constitucionales, tan sábiamente combinados, que no puede vulnerarse uno de ellos sin afectar á los demas, con mengua del sistema adoptado en la Nación. No hacen mas que desengañar sin réplica alguna, que las leyes de desamortización deben limitarse á las mismas acciones y derechos que disfrutaban los acreedores, y que no dan lugar á la ocupación de bienes y capitales denunciados, sin que precedan pruebas que por su naturaleza traigan aparejada ejecución, cuya fuerza tenga su origen de la obligación, de la ley, á no ser que con la de testigos, peligrosa y terrible, se exponga á sufrir un desengaño, con el saludable remedio que al efecto dispuso la misma Constitución general en los artículos 101 y 102. El juicio que en su vir-



tud se acaba de instruir, es una leccion de los resultados del abuso y de la animosidad. Dos testigos que valorizó el C. Gefe superior de Hacienda, resultan falsarios en el término de pruebas, porque Pedro Estrada, tergiversa el sentido de su primera declaracion, y Raimundo Martinez se desmiente, escusándose con la sorpresa y el soborno; y á pesar de este interesante descubrimiento, los agraviados prueban suficientemente con testigos fidedignos, su propiedad, afianzada en la prescripcion, título muy respetable en derecho, cuyo origen y fundamento viene de las regalías antiguas, que los reyes de España hicieron á los indios fieles de esta Ciudad, trasmitidas hasta ellos desde sus progenitores. Y para mayor confusion, han probado tambien con los principales vecinos del barrio de San Antonio, que en su capilla no se ha conocido cofradía alguna que tenga imposiciones, réditos ó cosa semejante; y que cuando celebran la festividad del santo, acuden á la piedad, que contribuyo con limosnas y voluntarias recaudaciones. Por lo que la denuncia del C. Pánfilo Ortega, no solo debia considerarse vaga, sin pruebas, sino tambien peligrosa con la de testigos que no merecen fé.

En virtud de lo expuesto, el fiscal pide en nombre de la Nacion: que el C. juez de Distrito conceda el amparo que los CC. Serapio Santiago y Luis Rodriguez, solicitan por cuanto el fallo de 22 de Abril último viola la parte 3ª del art. 97 y los artículos 16 y 27 de la Constitucion general.

San Cristóbal Las Casas, Junio diez y siete de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Manuel A. Mijangos.*

#### *Sentencia del Juzgado de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado. San Cristóbal Las Casas, Junio veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el memorial en que los CC. Serapio Santiago y Luis Rodriguez, han pro-

movido el presente juicio de proteccion y amparo, contra una resolucion de la Gefatura de Hacienda del Estado, en que se declaran comprendidos en las leyes de nacionalizacion de los bienes de la mano muerta, tres sitios ó solares que los exponentes dicen ser de su propiedad, y se adjudican al denunciante de ellos C. Pánfilo Ortega; el auto de suspension de la providencia reclamada; lo informado por la propia Gefatura de Hacienda; lo alegado y probado por las partes, y cuanto mas de autos ver-se debia:

Considerando: que la resolucion de la gefatura de hacienda tiene por fundamento una informacion testimonial, instruida á peticion del denunciante por el juzgado de 1ª instancia del ramo de lo civil de este departamento, entre los CC. Pedro Estrada y Raimundo Martinez, quienes declaran que los sitios ó solares han pertenecido á la cofradía de San Antonio y que los que se dicen sus dueños, Santiago y Rodriguez, los han poseido y cultivado con el carácter de mayordomos; y que esta informacion es nula de riguroso derecho por haberse evacuado, segun aparece de estas actuaciones, sin citacion de la parte contraria.

Considerando: que aun dado el supuesto de que por ese defecto sustancial, no fuera nula de riguroso derecho, ninguna fé puede merecer en apoyo de la providencia reclamada, habiéndola desvirtuado los mismos declarantes, al ser examinados por este juzgado en tiempo y forma, manifestando no ser cierto que aseguraran ante el ño 1ª instancia del ramo de lo civil de este departamento, que estos sitios pertenecieran á cofradía de santo alguno, y que si expusieron que eran de San Antonio, fué en el concepto de que pertenecian á la seccion, mas no al santo de este nombre.

Considerando: que los interesados han probado con el testimonio de los CC. Máximo Ramos, Ignacio Arismendiz, Vicente Velasco y Tomás Martinez, testigos citados al arbitrio de este juzgado, á instancia de

parte, que no ha existido, ni existe cofradía alguna en favor de San Antonio, ni de la iglesia así llamada, y que esta tampoco ha recibido ni recibe cantidad alguna de rentas procedentes de terrenos, fincas urbanas ni otro título cualquiera, pues para celebrar las funciones que en dicha iglesia tienen lugar, han apelado siempre y apelan ahora, á la piedad de los fieles.

Considerando: que así mismo han probado los CC. Santiago y Rodriguez, con el testimonio unánime de los CC. Eustaquio Chanona, Cándido Gomez, Domingo Balcázar y José María Ruiz, que hace mas de cuarenta años poseen en propiedad los sitios referidos, los cuales no han sido, ni se han estimado nunca nacionales, ni pertenecientes á cofradía, iglesia ni corporacion alguna, pues ninguna noticia han tenido en contrario sentido.

Considerando: que igualmente han probado con el testimonio de los CC. José Ruiz y Benigno Martinez, de edad de sesenta y seis años el primero, y mayor de ochenta el segundo; que los solares que Santiago y Rodriguez dicen pertenecerles, correspondieron á los terrenos que la corona de España concedió á los indios de San Antonio, antes llamados de San Márcos, en recompensa á los servicios que, así estos como sus antepasados, prestaban á aquella, y que lo saben porque así lo oían decir de Tomás Espino, Apolinario Ruiz, José Perez y Pedro Mártir Martinez, muertos hace mucho tiempo, á una edad muy avanzada el primero, el segundo y el tercero, y á la de cien años mas que menos el último.

Considerando: que practicada á petición de parte y con los requisitos legales establecidos, una vista de ojos por este juzgado, se ha encontrado que los sitios están cubiertos con cercas artificiales, sembrados de antiguos árboles frutales y de milpas, y con marcados rastros que esplican de una manera clara, haber sido constantemente preparados para el cultivo por la mano del hombre, constituyendo á lo que parece,

parte del miserable patrimonio de los reclamantes.

Considerando: que la circunstancia de que un sitio ó solar sea criazo, no da derecho conforme á las leyes de reforma para adjudicarlo á persona alguna; porque un solar ó sitio, ú otro terreno cualquiera, muy bien pueden ser criazos sin que por esto pertenezcan á bienes nacionalizados, ni que por ese carácter puedan dejar precisamente de constituir una propiedad.

Considerando: que las pruebas aducidas han venido á demostrar de una manera clara y evidente, que aunque los peticionarios no tuvieran otro medio que justificara el derecho de propiedad que alegan tener en los sitios ó solares referidos; el prolongado tiempo que sin interrupcion alguna hace los han poseído; la buena fé con que se han estimado dueños, y la constante creencia de que los han obtenido por un justo título, cual es el de donacion hecha á sus antepasados, de quienes los han adquirido, los daría mediante prescripcion, el mas perfecto derecho de propiedad en ellos.

Considerando: que entre las declaraciones emitidas ante el juzgado de 1ª instancia del ramo de lo civil de este departamento en 17 de Febrero último (fojas 14) por los CC. Pedro Estrada y Raimundo Martinez y las que los mismos produjeron ante este juzgado en 7 del corriente (fojas 33); existe una manifiesta falta de verdad, que constituye á aquellos en la condicion de perjuros y falsarios, cosa que aparece igualmente comprobada con la declaracion de los CC. Ignacio Arismendiz y Vicente Volasco, (fojas 26 y 27.)

Considerando, por último: que por todo lo expuesto puede legalmente sostenerse, que los sitios mencionados son de la propiedad de los CC. Serapio Santiago y Luis Rodriguez, y que despojados de ellos por una providencia como la que ha originado el presente juicio de amparo, se ha violado la garantía que consagra á todo mexicano la parte 1ª del art. 27 de la constitucion



política de la república de 5 de Febrero de 1857; este juzgado con fundamento de lo expuesto, de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la propia Constitución, 13, 23 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869 falla:

Primero, La justicia nacional ampara y protege á los CC. Serapio Santiago y Luis Rodríguez, contra la resolución de la Gefatura de hacienda del Estado de 22 de Abril del corriente año, que declara estar sujetos á la nacionalización, y manda adjudicar al C. Pánfilo Ortega, los sitios de la propiedad de aquellos, ubicados al Sud Oeste de esta ciudad, por hallarse violada la garantía de que trata la 1ª parte del art. 27 de la Constitución general de la República, quedando las cosas en el estado que guardaban antes de ser esta violada.

Segundo; Se sacará copia de las declaraciones de los CC. Pedro Estrada, Raimundo Martínez, Ignacio Arizmendiz y Vicente Velasco, y de la parte respectiva de esta sentencia, y se consignará al juzgado de 1ª instancia del ramo de lo criminal de este departamento, para que en su vista proceda á lo que haya lugar.

Tercero; Hágase saber á quienes corresponda; satisfágase por los promoventes los honorarios devengados por el C. Promotor fiscal específico, y remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia, para su revisión.

Así lo decretó, mandó y firmó el C. Lic. Juan José Ramírez, juez de distrito propietario del Estado, por ante mí el infrascrito secretario. Doy fe.—(Firmados).—*Juan J. Ramírez.*—*J. Crisóstomo Lara*, secretario.

-----  
*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Chiapas por los CC. Serapio Santiago y Luis Rodri-

guez, contra una resolución de la Gefatura de Hacienda de aquel Estado, en que declara como bienes pertenecientes á la Nación, unos terrenos de la propiedad de los quejosos, mandándolos adjudicar al denunciante C. Pánfilo Ortega. Visto el informe de la autoridad contra quien se promueve el recurso; los documentos que acompañan como justificantes; las pruebas aducidas por los peticionarios; el parecer del Ministerio público y la sentencia del juzgado de Distrito, todo favorable á los promoventes. Considerando: que los terrenos en cuestión son de la propiedad de los quejosos, lo que está plenamente probado en las constancias de autos. Considerando: que está destruido por el mismo dicho de los testigos el fundamento que sirvió á la Gefatura para su determinación, según aparece de las declaraciones rendidas ante el juzgado de Distrito, contradictorias á las dadas ante el de lo civil de esa ciudad, importando por lo mismo dicha declaración una expresa violación de las garantías que otorga á este respecto el art. 27 de la Carta General de la República; con tales fundamentos se declara:

Primero; que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Chiapas, que en su parte resolutive decreta: 1ª La justicia nacional ampara y protege á los CC. Serapio Santiago y Luis Rodríguez, contra la resolución de la Gefatura de Hacienda del Estado, de 22 de Abril del corriente año, que declara estar sujetos á la nacionalización y manda adjudicar al C. Pánfilo Ortega, los sitios de la propiedad de aquellos, ubicados al Sud-Oeste de esta ciudad, por hallarse violada la garantía de que trata la 1ª parte del artículo 27 de la Constitución general de la República, quedando las cosas en el estado que guardaban, antes de ser ésta violada.

Segunda; se sacará copia de las declaraciones de los CC. Pedro Estrada, Raimundo Martínez, Ignacio Arizmendiz y Vicen-

te Velazco, y de la parte respectiva de esta sentencia, y se consignará al Juzgado de 1ª instancia del ramo de lo criminal del este departamento, para que en su vista proceda á lo que haya lugar."

Segundo; no se confirma esta sentencia en la parte que impone á los promoventes satisfacer honorarios.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de Distrito de Chiapas con testimonio de este fallo; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis Mª Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Agosto dos de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por María Ignacia Hernandez, en nombre de su hijo Silvestre Solis, por violacion de garantías individuales.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Señor Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice:

María Ignancia Hernandez en escrito del veinte del presente, ocurrió á ese juzgado en nombre de su hijo Silvestre Solis, manifestando que: contra su voluntad se halla de Orden del C. coronel Florentino Carrillo sirviendo en clase de soldado en el batallon núm. 21: juzga que con ese hecho se le violan á su hijo las garantías individuales que tiene aseguradas por los ar-

tículos 2 y 5 de la Constitucion federal, y apoyada en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pide amparo y proteccion contra el acto que envuelve violacion.

Pedido informe con justificacion al C. coronel Florentino Carrillo, expone en el que rindió con fecha 22 que: Silverio Solis se haya por su voluntad sirviendo en clase de soldado, lo que justifica con la copia de la filiacion; y que ademas, el amparo se ha pedido sin su consentimiento y en contra de sus deseos, lo que demuestra con un escrito que le presentó haciendo tal manifestacion. Abade el Sr. Carrillo, que siendo mayor de edad Silvestre Solis, y no queriendo que en su nombre se solicite el amparo que ha pedido María Ignacia Hernandez, carece de personalidad legítima para representar á su hijo.

Apareciendo ciertos como aparecen, los hechos que refiere el Sr. Carrillo, el amparo no procede, porque no lo pide el interesado y porque no hay algun hecho que le viole alguna de sus garantías.

Por esto el promotor pide que se sobresea en este juicio.

Guadalajara, Abril veintiseis de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Juan Robles Martínez.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guadalajara, Junio treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos:

La Sra. Dª María Ignacia Hernandez, entabló ante este juzgado, juicio sobre amparo y proteccion de garantías en favor de su hijo Silvestre Solis, asegurando haber sido tomado de leva y puesto en calidad de soldado en el batallon 21 de línea. Pedido informe con justificacion al C. coronel Florentino Carrillo, contra quien se entabló el juicio, lo evacuó manifestando, que Solis se hallaba en la cárcel extinguiendo una condena á que fué sentenciado, en Marzo del